

¿Está el rol del bien público de la educación superior bajo ataque?

ELLEN HAZELKORN

Ellen Hazelkorn es profesora emérita y ex directora de la Unidad de Investigación de Políticas en la Educación Superior (HEPRU, por sus siglas en inglés) en Irlanda y coinvestigadora internacional en el Centro para la Educación Superior Global fundado por ESRC/HEFCE, Londres, Reino Unido. Correo electrónico: ellen.hazelkorn@dit.ie.

En general, la educación superior se ve como un servicio para el bien público, especialmente cuando el Estado la financia directamente y porque sus beneficios se extienden hasta el individuo y la sociedad. Es la fuente del capital humano, la innovación y el emprendimiento que alimenta y mantiene las ambiciones personales, sociales y económicas y el desarrollo que la sociedad y los ciudadanos requieren mientras sostiene a la sociedad civil. Como tal, hay un contrato social implícito que equilibra el apoyo público, a través de los impuestos y las políticas públicas, a cambio de autonomía institucional.

Las universidades cívicas y establecidas bajo el esquema “land grant” (“tierras concedidas”) —en el Reino Unido, Estados Unidos y en otras regiones y países— son un buen ejemplo de este equilibrio. Las universidades fueron establecidas para entregar “objetivos articulados públicamente”, mientras la academia mantenía un papel importante en la determinación y reivindicación de los valores y la calidad. Ha existido un supuesto subyacente de que si se representa y promueve el bien público a través de la docencia, la investigación y el servicio/compromiso, las acciones y los resultados de las universidades (públicas) serían ipso facto en el interés público.

Hoy, muchos supuestos que han sustentado el apoyo público a la inversión en la educación superior no han resultado ser ciertos. En una época cuando la demanda por educación superior sigue en aumento, más gente se siente excluida —luchando por cumplir con las expectativas personales y sociales. La distribución desigual de los bienes sociales ha sido acompa-

ñada por la percepción de que al resto del mundo le está yendo mejor. El beneficio económico, la investigación, el desarrollo y la innovación tienen un impacto insuficiente fuera de las metrópolis. Además, estamos compitiendo con ciudades y países que la mayoría de nosotros nunca conoció o consideró previamente.

Las encuestas en el Reino Unido y los Estados Unidos sugieren que las universidades y los docentes son considerados están demasiado interesados en sus propios objetivos y no lo suficientemente interesados en el aprendizaje o los resultados de los estudiantes. Si bien la comunidad universitaria se fascina por la posición en los rankings internacionales, menos del uno por ciento de los estudiantes estadounidenses asiste a las universidades más selectivas como Harvard y Yale y sólo un nueve por ciento de los estudiantes del Reino Unido asiste a Oxbridge o las universidades del Grupo Russell.

Estas visiones globales opuestas se evidencian en los recientes resultados de las elecciones en el Reino Unido, los Estados Unidos y Francia y en las mayores tensiones sociales en otros lugares. Éstas muestran una brecha creciente entre las universidades y la gente que vive en pueblos y ciudades opuestas a la globalización y comunidades y regiones con un enfoque local.

TENSIONES ENTRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA SOCIEDAD

En Europa y en otras partes del mundo, la educación superior está bajo presión.

- En los Estados Unidos, la acreditación ha sido tradicionalmente una responsabilidad compartida por una “triada” entre el gobierno federal, las agencias de acreditación regionales y los gobiernos estatales, junto al apoyo fundamental de la academia. El rol del gobierno federal ha sido relativamente menor. Sin embargo, a lo largo de los años, ha aumentado la preocupación por la tasa de graduación y empleabilidad de los estudiantes, especialmente cuando esto se observa en un contexto donde los precios de la universidad y la deuda estudiantil van en aumento. La administración de Obama creó el College Scorecard “para que las universidades rindan cuentas por el costo, el valor y la calidad” y sincerar el desempe-

ño de la educación superior al escrutinio público. Adicionalmente, hay varias acciones a nivel del congreso que apuntan a reforzar las prácticas de acreditación y las prácticas de los acreditadores.

- En el Reino Unido, se publicó la primera versión del Marco para la Excelencia Académica (TEF, por sus siglas en inglés). Su propósito es darles a los estudiantes mejor información sobre la calidad de los programas de estudio y elevar el perfil de la docencia. En cierta medida, el TEF suplanta la práctica anterior de aseguramiento de la calidad (QA, por sus siglas en inglés) que producía informes extensos para las instituciones y, por lo tanto, era inadecuado para medir y comparar el desempeño y los resultados de los estudiantes. El QA con frecuencia ha sido criticado por ser demasiado burocrático y por ser un ejercicio que se limita a hacer sólo lo que se pide, sin mayor análisis. Estos avances han contribuido al deterioro de la confianza y a una brecha que los rankings han llenado. El TEF le habla a una serie de necesidades e intereses, incluyendo a un público y sistema político más escéptico y a un mercado educacional diverso.
- En Irlanda, el gobierno presentó su visión para la educación superior en la Estrategia Nacional para la Educación Superior hasta en 2030 (2011). Desarrollado por un grupo de expertos tras extensas consultas, éste promueve el concepto de “sistema como un todo”, en contraste con la visión que promulgan frecuentemente los rankings universitarios, donde se destaca el desempeño de las instituciones individuales. La estrategia también reconoce las limitaciones del tamaño de un país y su presupuesto. El gobierno busca que las instituciones rindan cuentas a través de un proceso de negociación llamado “Diálogo Estratégico”, para asegurar un mejor alineamiento entre el desempeño y la misión institucional y los objetivos generales de la política nacional. También se adoptó una estrategia de priorización de la investigación que vincula el financiamiento con los sectores industriales claves.

Hoy, muchos supuestos que han sustentado el apoyo público a la inversión en la educación superior no han resultado ser ciertos.

- En los Países Bajos, una serie de eventos llevaron, en las últimas décadas, a un mayor involucramiento del gobierno con la intención de hacer que las universidades sean más productivas y eficientes e introducir el principio de planificación científica de largo alcance. Esto obedeció a las inquietudes que había en torno a la diferenciación institucional y el desempeño de los estudiantes, especialmente la baja retención y la inhabilidad del sistema para satisfacer las distintas necesidades de los estudiantes y el mercado laboral. Las universidades en general y las universidades de ciencias aplicadas han firmado acuerdos estratégicos colectivos con los ministerios del gobierno relevantes a través de asociaciones, las que han proveído el marco para estos acuerdos. Los acuerdos, hechos por instituciones de educación superior individuales, incluyen declaraciones y metas en relación a la estructura del sistema, perfiles institucionales y programas; y están vinculados al financiamiento.

¿TIEMPO PARA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL?

Estos ejemplos ilustran sólo algunas formas de cómo las crecientes tensiones entre la educación superior y la sociedad —con frecuencia descrita en términos de rendición de cuentas (social) vs. Autonomía (institucional) — se están volviendo más visibles y, a momentos, polémicas. Algunas decisiones y eventos recientes en Hungría, India y Turquía expusieron de forma preocupante un conjunto diferente de fisuras. No obstante, colectivamente, todas estas instancias plantean preguntas sobre el rol de la educación superior en la sociedad de hoy y cómo las universidades, los gobiernos y el público determinan en la práctica lo que es el “bien público”.

Las “incursiones” del gobierno en dominios tradicionalmente asociados con la autogestión académica, como el enfoque en el desempeño y los resultados, con frecuencia se presenta como evidencia de la nueva gestión pública neoliberal (NPM, por sus siglas en inglés). Recientemente, las políticas y el pensamiento nacionalistas y nativistas han puesto a la educación superior en conflicto con los gobiernos que han hecho compañía para restringir a los extranjeros, frenar el multiculturalismo y cuestionar los valores sociales liberales. Estas tendencias “ideológicas” le han permitido a la comunidad académica ignorar la crítica genuina, aumentando, como consecuencia, las preocupaciones del público sobre la arrogancia y aislamiento de la educación superior.

Irlanda es nuevamente un ejemplo interesante. El incumplimiento de una universidad para responder los alegatos legítimos de irregularidades financieras, denunciadas por opositores, ha provocado que todo el sistema esté bajo escrutinio público. A su vez, las universidades han argumentado que el menor financiamiento público ha transformado a las instituciones públicas en privadas, alterando el modelo de gobernanza. Sin embargo, al hacer esto, las universidades han efectivamente transformado su rol de “bien público” hacia una relación transaccional —abriendo la caja de Pandora.

En las últimas décadas, hemos presenciado un cambio significativo en los acuerdos de gobernanza, desde regulaciones estrictas hasta una gestión más autónoma, hasta signos de un nuevo contrato social. Este último modelo involucra que las instituciones de educación superior y los gobiernos se unan para formar una visión común con los resultados acordados. Estas prácticas están en marcha en, entre otros lugares, Australia, Hong Kong, Irlanda, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega y Ontario. El proceso muestra el potencial de que metas diferentes no necesitan ser mutuamente excluyentes y de que responderle a la sociedad puede darles legitimidad a los propios objetivos de la academia en un sentido más amplio.

Mientras que el Estado históricamente contempló las necesidades de las universidades, hoy —en la era de la globalización y educación superior

casi universal— las instituciones de educación superior contemplan las necesidades de la sociedad. En este nuevo escenario, la educación superior puede elegir participar de forma significativa en la ayuda para construir un nuevo contrato social o el Estado intervendrá —tomando toda la responsabilidad para sí mismo. ■

“Libertad de expresión” y expresión “ofensiva” en el campus

PETER SCOTT

Peter Scott es profesor de estudios en educación superior en el Instituto de Educación de University College London, Reino Unido. Él también es el Comisionado para el Acceso Equitativo para Escocia. Correo electrónico: p.scott@ioe.ac.uk.

Las amenazas a la libertad de expresión y la libertad académica son legión —desde regímenes autoritarios en China, Hungría, Rusia y Turquía y los Estados del Medio Oriente asediados por el fundamentalismo religioso, hasta populistas de la derecha que creen que sus culturas y comunidades están bajo ataque (y que con frecuencia ven a las universidades como bastiones del liberalismo y cosmopolitismo).

Pero los liberales también se han visto involucrados. Estudiantes de la Universidad de Yale y la Universidad de Princeton han hecho campaña para renombrar los edificios del campus, siendo uno de sus objetivos el presidente Woodrow Wilson, el autor de los “Catorce Puntos”, los principios liberales que terminaron la Primera Guerra Mundial. Luego del éxito de los estudiantes en Ciudad del Cabo, los estudiantes de la Universidad de Oxford han intentado replicar la campaña “Rhodes debe caer”, aunque la ofensora estatua de Oxford del último imperialista victoriano Cecil Rhodes es una versión más modesta que está en el muro de Oriel College.